Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha doce (12) de marzo de dos mil veinticinco.

**VISTAS** las constancias para resolver el recurso de revisión **05168/INFOEM/IP/RR/2024**, presentado por **XXXX,** a quien en lo sucesivo llamaremos **RECURRENTE o PARTICULAR**, en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información con número de folio **00401/CAEM/IP/2024**, por parte de la **Comisión del Agua del Estado de México,** en adelante el **SUJETO OBLIGADO,** se emite la presente resolución con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El día **diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro**,se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en adelante (SAIMEX), la siguiente solicitud de información pública:

*“Con fundamento en los artículos 1, 4, 5, 6 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como en los artículos 2, 7, 8 y 30 de su Reglamento, solicito respetuosamente la entrega de la siguiente información relacionada con la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM): Capacidades y Experiencia Profesional: Documentos que acrediten la formación académica y profesional, incluyendo títulos, cédulas, diplomas, y certificaciones, de los servidores públicos que ocupan los puestos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento en la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias. Relación detallada de la experiencia profesional y laboral de cada uno de los servidores públicos mencionados, especialmente su trayectoria en la gestión de emergencias meteorológicas y atención a contingencias. Informes o constancias de participación en cursos de capacitación, entrenamientos y certificaciones recientes en materia de gestión de riesgos, atención a emergencias y otros temas relevantes. Situación Jurídica: Certificados de no inhabilitación emitidos por las autoridades competentes para cada uno de los servidores públicos que actualmente desempeñan los cargos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento pertenecientes a laDirección General de Operación y Atención a Emergencias. Resoluciones administrativas o judiciales, si las hubiere, que determinen la inhabilitación o sanción administrativa de cualquiera de los mencionados servidores públicos. Registros de cualquier proceso disciplinario o administrativo en curso o concluido que involucre a los servidores públicos mencionados. Evaluación de Actuación Reciente: Informes de desempeño o evaluaciones internas o externas realizados sobre la actuación de la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias en respuesta a los recientes eventos meteorológicos en el Estado de México. Auditorías, análisis de desempeño o evaluaciones de la eficacia de las medidas adoptadas y de la capacidad de respuesta de los servidores públicos responsables en dichos eventos. Precisión sobre la Naturaleza de la Información Solicitada: Versión Pública: En caso de que alguna parte de la información solicitada contenga datos personales, protegidos o confidenciales conforme a los artículos 7, 22, 24 y 30 de la Ley de Transparencia, solicito se me proporcione una versión pública de los documentos, suprimiendo únicamente los datos específicos protegidos, en cumplimiento con el principio de máxima publicidad. Información Reservada: Si alguna parte de la información está clasificada como reservada conforme a los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Transparencia, solicito que se me indique de manera específica y detallada la razón de dicha clasificación, incluyendo los fundamentos legales precisos y el periodo de reserva aplicable. Inexistencia de la Información: Si la información solicitada no existiera en los archivos de la dependencia, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento, solicito se me proporcione un acta o constancia de inexistencia debidamente fundamentada y motivada.”* (Sic)

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**

1. El **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro**, el Sujeto Obligado**,** dio respuesta a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), adjuntando un archivo electrónico en formato PDF ***00401.pdf;*** de cuyo contenido se desprende lo siguiente:

* Oficio número 219C0110010000S/01699/2024, de fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, por medio del cual dio respuesta al particular, y del que entre lo que interesa se observa: *“…Por lo anterior, derivado del análisis, se adjunta copia del oficio de respuesta con numero 219C0117L/1761/2024…”* (Sic)
* Oficio 219C0117L/1761/2024, de fecha veinte de agosto de dos mil veinticuatro, suscrito por la Directora General de Administración y Finanzas, del cual en lo que interesa se observa: *“… Por lo anterior, se comunica que este Dirección General no desagrega la información en la manera el que el recurrente pretende la entrega resultando aplicable el Criterio 09-10, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales…”*

1. El **veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro**, el particular interpuso el recurso de revisión en contra de la respuesta, realizando las siguientes manifestaciones:

* **ACTO IMPUGNADO: “***El acto impugnado en este recurso es la respuesta emitida por la CAEM en la que se me informa que: "Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones." Esta respuesta se refiere a mi solicitud de información sobre las capacidades y situación jurídica de los servidores públicos que ocupan los cargos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento en la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias de la CAE”* (Sic)
* **RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD:** *“Derecho de Acceso a la Información Pública: Conforme a los artículos 4, 6 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tengo el derecho de acceder a la información pública en posesión de los sujetos obligados. La respuesta de la CAEM no satisface este derecho, ya que no aborda de manera adecuada mi solicitud. Incongruencia de la Respuesta: La CAEM indica que no está obligada a procesar la información ni a presentarla conforme al interés del solicitante. Sin embargo, mi solicitud no requería el procesamiento de información adicional, sino la entrega de documentos ya existentes, como títulos, certificaciones, constancias de capacitación y certificados de no inhabilitación, que deben estar en posesión de la CAEM. Obligación de Entregar Información Existente: La respuesta de la CAEM no menciona que la información solicitada no exista, por lo que se presume que la misma está disponible. La negativa a entregar estos documentos o la omisión en la respuesta constituyen una violación al artículo 29 de la Ley de Transparencia, que establece la obligación de entregar la información disponible. Propuesta Alternativa de Entrega Ignorada: En mi solicitud, propuse la entrega de versiones públicas de los documentos en caso de que estos contuvieran datos sensibles o confidenciales. Esta propuesta fue ignorada en la respuesta de la CAEM, lo cual constituye una omisión que afecta mi derecho de acceso a la información. Presunción de Inexistencia no Justificada: La CAEM no argumentó que la información solicitada no existiera. En caso de que la información no esté en los archivos de la CAEM, debió haberse justificado de acuerdo con el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Transparencia. Petición: Con base en los motivos expuestos, solicito al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) que: Revise y evalúe la respuesta emitida por la CAEM, determinando si ésta cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley de Transparencia y su Reglamento. Instruya a la CAEM a entregar la información solicitada en los términos establecidos por la ley, asegurando que se respeten mis derechos como solicitante. Emita una resolución que garantice el acceso a la información pública solicitada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y siguientes del Reglamento de la Ley de Transparencia”* (Sic)

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**,se turna a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala,** para su análisis.
2. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión del **dos de septiembre de dos mil veinticuatro**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, **SAIMEX,** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos según correspondiera a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
3. El particular fue omiso en realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera.
4. Por su parte el **SUJETO OBLIGADO** el **seis de noviembre del año dos mil veinticuatro**, rindió su informe justificado, confirmando su respuesta primigenia.
5. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
6. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
7. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
8. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
9. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
10. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
11. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
12. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
13. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.
14. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
15. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
16. Seguidamente el **veintiséis de febrero de dos mil veinticinco**, se notificó el acuerdo mediante el cual se aprobó la ampliación de plazo para emitir resolución.
17. Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar a los expedientes, con fecha **cinco de marzo de dos mil veinticinco**, la **Comisionada** Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y, ordenó la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

## **PRIMERA. Competencia**

1. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDA. Procedencia.**

1. Este Órgano Garante considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERA. Del planteamiento de la *Litis***

1. Se solicitó, de manera general la información siguiente:

*Información relacionada con la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM):*

1. *Capacidades y Experiencia Profesional: Documentos que acrediten la formación académica y profesional, incluyendo títulos, cédulas, diplomas, y certificaciones, de los servidores públicos que ocupan los puestos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento en la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias.*
2. *Relación detallada de la experiencia profesional y laboral de cada uno de los servidores públicos mencionados, especialmente su trayectoria en la gestión de emergencias meteorológicas y atención a contingencias.*
3. *Informes o constancias de participación en cursos de capacitación, entrenamientos y certificaciones recientes en materia de gestión de riesgos, atención a emergencias y otros temas relevantes.*
4. *Situación Jurídica: Certificados de no inhabilitación emitidos por las autoridades competentes para cada uno de los servidores públicos que actualmente desempeñan los cargos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento pertenecientes a la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias.*
5. *Resoluciones administrativas o judiciales, si las hubiere, que determinen la inhabilitación o sanción administrativa de cualquiera de los mencionados servidores públicos. Registros de cualquier proceso disciplinario o administrativo en curso o concluido que involucre a los servidores públicos mencionados.*
6. *Evaluación de Actuación Reciente: Informes de desempeño o evaluaciones internas o externas realizados sobre la actuación de la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias en respuesta a los recientes eventos meteorológicos en el Estado de México.*
7. *Auditorías, análisis de desempeño o evaluaciones de la eficacia de las medidas adoptadas y de la capacidad de respuesta de los servidores públicos responsables en dichos eventos.*
8. *Precisión sobre la Naturaleza de la Información Solicitada: Versión Pública: En caso de que alguna parte de la información solicitada contenga datos personales, protegidos o confidenciales conforme a los artículos 7, 22, 24 y 30 de la Ley de Transparencia, solicito se me proporcione una versión pública de los documentos, suprimiendo únicamente los datos específicos protegidos, en cumplimiento con el principio de máxima publicidad. Información Reservada: Si alguna parte de la información está clasificada como reservada conforme a los artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Transparencia, solicito que se me indique de manera específica y detallada la razón de dicha clasificación, incluyendo los fundamentos legales precisos y el periodo de reserva aplicable. Inexistencia de la Información: Si la información solicitada no existiera en los archivos de la dependencia, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento, solicito se me proporcione un acta o constancia de inexistencia debidamente fundamentada y motivada.*
9. El **Sujeto Obligado,** remitió el escrito ya transcrito en el anterior numeral 2. Inconforme con la respuesta, se interpuso recurso de revisión alegando de manera general la negativa a la información solicitada.
10. En dichas condiciones, la controversia a resolver en el presente proveído, corresponde a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracciones I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado deMéxicoyMunicipios; fracción que determina la hipótesis relativa a la negativa de la información solicitada. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocará en determinar si el Sujeto Obligado con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaseñalada.

**CUARTO. Del estudio y resolución del recurso de revisión.**

1. Se procede analizar el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, y así este Órgano Garante dicte la resolución correspondiente, apegándose en todo momento al principio de máxima publicidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Ahora bien, este Órgano Garante considera viable realizar el estudio en aras de establecer si la respuesta e informe justificado del Sujeto Obligado colman la pretensión del Recurrente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimiento*** | ***Respuesta*** | ***Informe justificado*** | ***Colma*** |
| Información relacionada con la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)   1. *“…Capacidades y Experiencia Profesional: Documentos que acrediten la formación académica y profesional, incluyendo títulos, cédulas, diplomas, y certificaciones, de los servidores públicos que ocupan los puestos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento en la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias*…*”* (Sic) | A través del Servidor Público Habilitado, quien sólo manifestó que la Dirección no desagrega la información de manera en la que el Recurrente pretende la entrega | Ratifica su respuesta | **NO** |
| 1. *“…*Relación detallada de la experiencia profesional y laboral de cada uno de los servidores públicos mencionados, especialmente su trayectoria en la gestión de emergencias meteorológicas y atención a contingencias*…”* (Sic) | A través del Servidor Público Habilitado, quien sólo manifestó que la Dirección no desagrega la información de manera en la que el Recurrente pretende la entrega  la entrega | Ratifica su respuesta | **NO** |
| *“…*Informes o constancias de participación en cursos de capacitación, entrenamientos y certificaciones recientes en materia de gestión de riesgos, atención a emergencias y otros temas relevantes *…”* (Sic) | **NO** |
| 1. *“…*Situación Jurídica: Certificados de no inhabilitación emitidos por las autoridades competentes para cada uno de los servidores públicos que actualmente desempeñan los cargos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento pertenecientes a la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias*…”* (Sic) | **NO** |
| 1. *“…*Resoluciones administrativas o judiciales, si las hubiere, que determinen la inhabilitación o sanción administrativa de cualquiera de los mencionados servidores públicos. Registros de cualquier proceso disciplinario o administrativo en curso o concluido que involucre a los servidores públicos mencionados*…”* (Sic) | **NO** |
| 1. “…Evaluación de Actuación Reciente: Informes de desempeño o evaluaciones internas o externas realizados sobre la actuación de la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias en respuesta a los recientes eventos meteorológicos en el Estado de México…” (Sic) | **NO** |
| 1. “…Auditorías, análisis de desempeño o evaluaciones de la eficacia de las medidas adoptadas y de la capacidad de respuesta de los servidores públicos responsables en dichos eventos…” (Sic) | **NO** |
| 1. “…Precisión sobre la naturaleza de la información solicitada…” (Sic) | **NO** |

1. Se destaca que el Sujeto Obligado emitió la respuesta a través del Servidor Público Habilitado, y sólo manifestó que la Dirección General no desagrega la información en la manera en que el recurrente pretende, sin agregar ningún documento.

1. Continuando con el presente estudio y de conformidad con la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, el Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de México y, el Manual General de Organización de la Comisión del Agua del Estado de México se advierte lo siguiente:

***SECCIÓN TERCERA***

***DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO***

***Artículo 17.-*** *La Comisión es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría, con carácter de autoridad fiscal.*

*La Comisión tiene por objeto planear, programar, presupuestar, diseñar, construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de suministro de agua potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reuso de aguas tratadas, así como la disposición final de sus productos resultantes, e imponer las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de la normatividad en la materia.*

El Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de México, establece:

***…***

***Artículo 13.*** *Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, así como para atender las acciones de control y evaluación que le corresponden, el Vocal Ejecutivo se auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes:*

1. *Dirección General del Programa Hidráulico;*
2. *Dirección General de Inversión y Gestión;*
3. *Dirección General de Infraestructura Hidráulica;*
4. ***Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias;***
5. *Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores;*
6. *Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, y*
7. *Dirección General de Administración y Finanzas.*

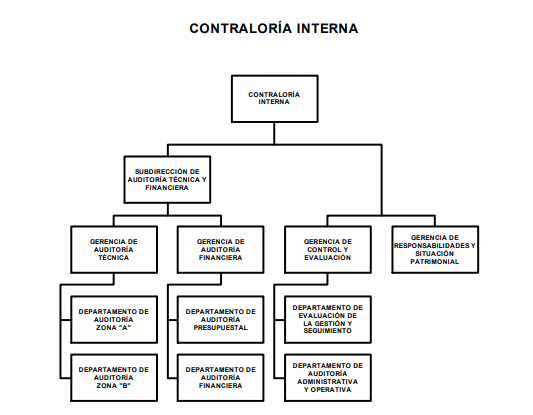
***La Comisión contará con un Órgano Interno de Control*** *y con las demás unidades administrativas que le sean autorizadas, cuyas funciones y líneas de autoridad se establecerán en su Manual General de Organización; asimismo, se auxiliará de los Servidores Públicos y órganos técnicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su objeto, de acuerdo con la estructura orgánica y presupuesto autorizados, y normatividad aplicable.*

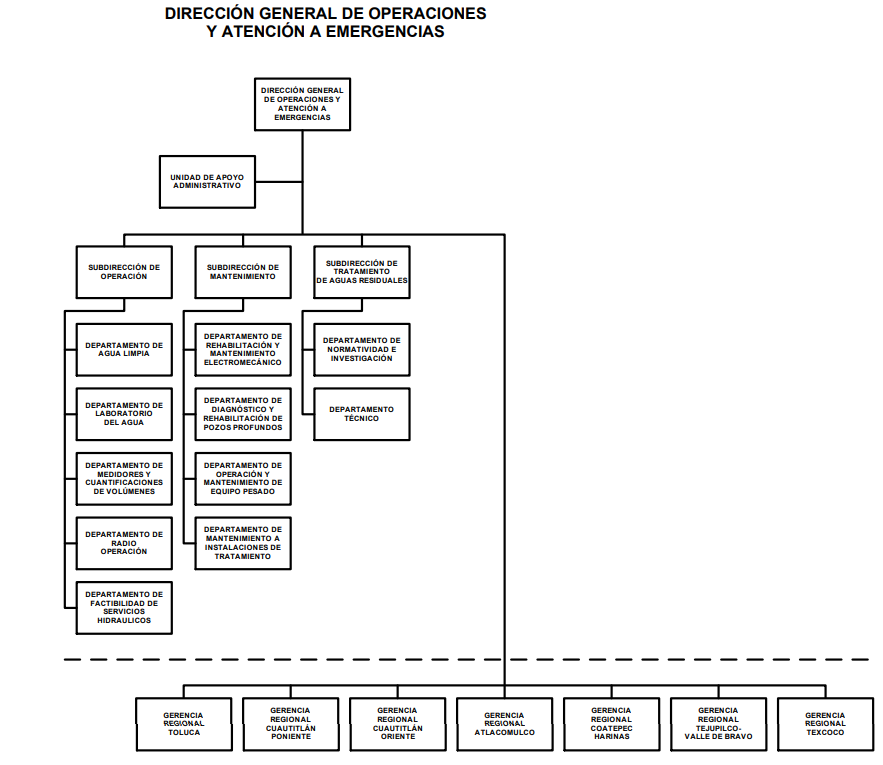
***CAPÍTULO V***

***DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL***

***Artículo 23.*** *Está adscrito orgánica y presupuestalmente a la Comisión, un órgano interno de control, cuyo titular depende funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, con las atribuciones que se establecen en el Reglamento Interior de ésta y los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.*

1. Dentro del Manual General de Organización de la Comisión del Agua del Estado de México, se observa el organigrama de la Contraloría Interna y de la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias:





Dentro del mismo se establecen los objetivos y funciones de cada área que compone la Comisión del Agua del Estado de México

***229B11000 CONTRALORÍA INTERNA***

***OBJETIVO:***

*Fiscalizar, revisar y evaluar el grado de eficacia y legalidad con que se aplica la normatividad, políticas y disposiciones jurídico – administrativas establecidas para el manejo y ejercicio de los recurso humanos, materiales y financieros, a efecto de garantizar la estricta disciplina presupuestal y la protección del patrimonio de la Comisión.*

***FUNCIONES:***

* *Planear y evaluar el desarrollo de los programas que se le encomienden de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría*
* *…*
* ***Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios, resarcitorios y de manifestación de bienes, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios****.*
* ***Dirigir las auditorías y revisiones directas y selectivas, orientadas a verificar la observancia de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal****, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales de la Comisión.*
* ***Establecer los lineamientos, normas, políticas y procedimientos para la ejecución de auditorías a las unidades administrativas de la Comisión***

*…*

* *Establecer los lineamientos, normas, políticas y procedimientos para la ejecución de auditorías a las unidades administrativas de la Comisión.*

*…*

* *Remitir a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría los expedientes en los que el interesado solicite la abstención de ser sancionado.*
* *Acordar la suspensión temporal de las servidoras públicas/los servidores públicos durante la substanciación del procedimiento administrativo conforme a la ley en la materia, así como dar aviso a la autoridad correspondiente.*
* *Promover el fortalecimiento de mecanismos de control de gestión en las unidades administrativas de la Comisión, así como impulsar acciones de autocontrol y autoevaluación en las mismas, mediante el análisis de riesgos.*
* *…*
* *Verificar que las diferentes unidades administrativas de la Comisión elaboren los diagnósticos derivados de las acciones de control y evaluación realizadas.*
* *…*
* *Notificar al área jurídica de la Comisión de los hechos que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de un delito.*

***229B80000 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS***

***OBJETIVO:***

*Planear y programar la operación y el mantenimiento preventivo o la reparación de la infraestructura hidráulica con la que se proporciona a los ayuntamientos, organismos operadores, sector social y privado los servicios de agua potable en bloque, así como la utilizada para el desalojo de aguas residuales y pluviales y su tratamiento y colaborar en la atención inmediata a las emergencias y contingencias que se presenten en materia hidráulica en el ámbito estatal y cuando se solicite en la federal y municipal, en el marco de la normatividad vigente en la materia.*

***FUNCIONES:***

***…***

* *Proporcionar, a través de las áreas administrativas de la Comisión, asistencia técnica a los ayuntamientos y organismos operadores que lo soliciten, relacionada con la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas.*
* *…*
* *Verificar, a través de las áreas administrativas respectivas, que la operación y el mantenimiento preventivo y la reparación de la infraestructura hidráulica a cargo de la Comisión, se lleve a cabo conforme a los programas y lineamientos establecidos para garantizar su funcionamiento.*
* *…*
* *Verificar que los reportes e informes de las actividades de las Gerencias Regionales y demás unidades administrativas de la Dirección General, se envíen con oportunidad a las dependencias y áreas internas de la Comisión, para la elaboración de los informes de gobierno, cuenta pública, programas de trabajo, indicadores, metas por proyecto, reporte de volúmenes suministrados a municipios de agua en bloque y recarga de reactivos con mantenimiento al sistema de desinfección, fichas para el Atlas de Inundaciones y contingencias y las estadísticas de las estaciones pluviométricas.*
* Participar en materia de transparencia y acceso a la información pública, conforme a la normatividad correspondiente.

***229B80100 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO***

***OBJETIVO****:*

*Proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de las actividades y programas de las unidades administrativas de la Dirección General, así como utilizarlos y ejercerlos con criterios de eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal y optimizar su utilización y aprovechamiento.*

***FUNCIONES:***

*…*

* *Tramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades administrativas de la Dirección General, ante la Dirección General de Administración y Finanzas.*

*…*

* ***Promover y coordinar los programas de capacitación, adiestramiento,*** *motivación e incentivos,* ***conjuntamente con la Dirección General de Administración y Finanzas, para contribuir a la profesionalización de las servidoras públicas/los servidores públicos de la Dirección General.***
* *Mantener actualizada la plantilla del personal que labora en la Dirección General, con el fin de facilitar el registro interno de los movimientos del personal.*

***229B80010 AL 229B80016 GERENCIAS REGIONALES (TOLUCA, CUAUTITLÁN PONIENTE, CUAUTITLÁN ORIENTE, ATLACOMULCO, COATEPEC HARINAS, TEJUPILCO-VALLE DE BRAVO Y TEXCOCO)***

***OBJETIVO:***

*Organizar, coordinar y controlar la operación y mantenimiento, en su caso, de los sistemas de abastecimiento, almacenamiento, desinfección y conducción de agua potable en bloque, proveniente de fuentes federales y estatales, así como de los sistemas de drenaje, desinfección, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas que se le encomienden para su administración, además de otorgar asesorías y atender las contingencias que se presenten, en colaboración con las demás unidades administrativas que integran la Comisión.*

***FUNCIONES:***

*…*

* *Proporcionar asesoría a las autoridades municipales, administraciones locales u organismos operadores para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas, cuando lo soliciten o en caso de emergencia*

*…*

* *Coordinar, con las autoridades federales, estatales, municipales y organismos operadores, la solución de problemas específicos en materia de agua potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas, previo acuerdo de las partes o en caso de emergencia.*
* *Coordinar e implementar las acciones necesarias con las autoridades y unidades administrativas correspondientes y con representantes vecinales, para atender las contingencias ocasionadas por fenómenos hidrometeorológicos, así como preparar los informes para la elaboración del reporte de la contingencia y del Atlas de Inundaciones en la Entidad, mediante la asignación de recursos suficientes y necesarios y la participación de las áreas involucradas.*
* *…*
* *Proporcionar apoyo, a las unidades administrativas de la Comisión, en la operación de los sistemas de agua potable, desinfección, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de aguas tratadas localizados en la región respectiva, en caso de emergencias.*

***229B61000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN***

***OBJETIVO:***

*Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para que las unidades administrativas de la Comisión cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos y con los servicios generales que contribuyan al eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones.*

***FUNCIONES:***

*…*

* *Establecer y coordinar los mecanismos para controlar los movimientos del personal adscrito a la Comisión*
* *…*
* ***Promover la integración y ejecución del programa de capacitación para la profesionalización del personal***
* *Tramitar los movimientos de alta, baja, cambios de adscripción, permisos, licencias, vacaciones, etc., del personal asignado a las unidades administrativas adscritas a la Comisión*
* *…*
* *Mantener actualizada la plantilla del personal de la Comisión, con el fin de facilitar el registro interno de movimientos realizados*
* *…*
* *Verificar que se apliquen las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de personal para la contratación, estímulos, sanciones, permisos, licencias, control de nóminas, tiempo extraordinario, etc*

1. De lo anterior, se colige que el Sujeto Obligado cuenta con unidades administrativas que de conformidad con sus atribuciones pudieran dar atención a los requerimientos de la parte recurrente.
2. Ahora bien, respecto al primer y segundo punto de la solicitud, en el que se establece: *“…relacionada con la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM): Capacidades y Experiencia Profesional: Documentos que acrediten la formación académica y profesional, incluyendo títulos, cédulas, diplomas, y certificaciones, de los servidores públicos que ocupan los puestos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento en la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias. … Relación detallada de la experiencia profesional y laboral de cada uno de los servidores públicos mencionados, especialmente su trayectoria en la gestión de emergencias meteorológicas y atención a contingencias…”* (Sic), es dable primeramente recordar que las razones o motivos de inconformidad, son tendientes a impugnar la falta de entrega de lo solicitado.
3. Motivo de inconformidad que se considera procedente, en virtud que es de explorado derecho, que el acceso a la información pública se colma con la entrega del soporte documental donde conste o se advierta lo solicitado como obre en sus archivos y en el estado en que se encuentre sin la necesidad de elaborar documentos *ad hoc* a efecto de satisfacer las pretensiones específicas de los particulares como ciertamente se advierte en el caso concreto, cuando el solicitante refiere que los cálculos deberán estar debidamente formulados.
4. En relación con lo anterior, es dable hacer mención de lo que establecen los artículos 1, 47 fracción I de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que mencionan lo siguiente:

*“****ARTÍCULO 1.*** *Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y sus respectivos servidores públicos.*

***ARTÍCULO 47****.* ***Para ingresar al servicio público se requiere****:*

***I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice*** *por la institución pública o dependencia correspondiente;*

*II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de la presente ley;*

*III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;*

*IV. Acreditar, cuando proceda, el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Nacional;*

*V. Derogada.*

*VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en el artículo 93 de la presente ley;*

*VII. Tener buena salud, lo que se comprobará con los certificados médicos correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;*

***VIII. Cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos;***

*IX. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y aptitudes necesarios para el desempeño del puesto; y*

***X. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.***

*XI. Presentar certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste, si se encuentra inscrito o no en el mismo. La institución o dependencia que reciba un certificado en que conste que la persona que se incorpora al servicio público se encuentra inscrito el Registro de Deudores Alimentarios Morosos deberá dar aviso al juez de conocimiento de dicha circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar.*

1. Dado lo anterior, se desprende que para ingresar al servicio público de las diversas Instituciones, es requisito indispensable, entre otros, presentar una solicitud, utilizando el formato oficial autorizado por la institución pública, en de donde se infiere que, se trata de una solicitud de empleo, la cual necesariamente contiene apartados con información referentes a datos personales, **formación o perfil académico**, **experiencia profesional**, objetivos o aspiraciones personales entre otros.
2. De igual forma y aunado a lo manifestado por el sujeto obligado, al momento de dar respuesta a la solicitud de información, es importante señalar que el artículo 92 fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone que los sujetos obligados, deben poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible en los respectivos medios electrónicos la información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del Sujeto Obligado, el cual se transcribe a continuación:

*“****Artículo 92****.* ***Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla****, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,* ***la información, por lo menos****, de los temas, documentos y políticas* ***que a continuación se señalan****:*

*(…)*

***XXI.******La información curricular****, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;*

(…)

1. Correlativo a lo anterior, los “*Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”****,*** en su Anexo I referente a las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados contempladas en el artículo 70, fracciones II, VII, VIII y X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisan en los Criterios Sustantivos de Contenido con relación a la información pública que puede colmar, parte de la información requerida por el particular, los cuales se transcriben a continuación:

***Anexo I***

***Obligaciones de transparencia comunes***

***todos los sujetos obligados***

***Criterios para las obligaciones de transparencia comunes***

***El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII****.*

*En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determinan los datos, características y forma de organización de la información que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados determinados en el artículo 23 de la Ley General.*

***El artículo 70 dice a la letra****:*

***Artículo 70. En la Ley*** *Federal y* ***de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público*** *y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,* ***la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan****:*

***En las siguientes páginas se hace mención de cada una de las fracciones con sus respectivos criterios****.*

*[…]*

***XVII.******La información curricular******desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;***

***De todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado --desde el puesto de jefe de departamento o equivalente y hasta el titular— se deberá publicar la información curricular****, es decir, los datos que permitan identificarlos y conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar.*

*…*

***Criterios sustantivos de contenido***

*…*

***Criterio 2******Denominación del cargo, empleo, comisión o nombramiento otorgado***

***Criterio 3******Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del (la) persona y/o servidor(a) público(a)***

*…*

***Información curricular del (la) servidor(a) público(a)) y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado el cual deberá especificar lo siguiente****:*

***Criterio 5 Escolaridad:******Nivel máximo de estudios*** *(ninguno, primaria, secundaria, bachillerato, técnica, licenciatura, maestría, doctorado, posdoctorado)*

1. Así también, resulta oportuno referir que el título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrados tener los conocimientos necesarios de conformidad con la normatividad aplicable.
2. En contraste, la cédula profesional es un documento que tiene por objeto sustentar que una persona cuenta con la acreditación para ejercer la profesión indicada en la misma; a través del conocimiento de algunos de los datos ahí contenidos se puede corroborar la idoneidad de la persona para ocupar el empleo, cargo o comisión encomendado.
3. En este sentido, los documentos en cita son susceptibles de reflejar algunos de los siguientes atributos:

* **Número de cédula profesional:** Susceptible de consulta en el Registro Nacional de Profesiones que se localiza en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública y/o equivalente de las entidades federativas, es decir, es un dato que obra en registros públicos, no susceptible de actualizar causal alguna de clasificación.
* **Nombre del titular:** Es un atributo de la personalidad, esto es la manifestación del derecho a la identidad y razón que de por sí misma permite identificar a una persona física. Debe evitarse su revelación tratándose de particulares, en sentido contrario, tratándose de servidores públicos, el nombre no goza de protección, al ser un dato público.
* **Clave Única de Registro de Población:** Se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.
* **Nombre y firma del Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública:** Se estima como un dato de carácter público, al dar fe de que la expedición de la cédula profesional fue en ejercicio de las facultades conferidas.
* **Firma del titular:** Tratándose de personas físicas en el rol de ciudadanos, es considerada como un atributo de la personalidad, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial.

1. En contraste, tratándose de servidores públicos cuando se emite un acto de autoridad en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto jurídico es pública. Lo anterior, en virtud de que la firma se plasmó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, estribando entonces en un requisito de validez. Por tanto, la firma de los servidores públicos vinculada al ejercicio de la función pública es información pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido encomendados.
2. Al respecto también resulta importante, tomar en consideración la información relativa a la fotografía de los servidores públicos, como a continuación se detalla.

* **Fotografía de servidores públicos**: es preciso señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.

1. Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría a una persona como servidor público, por lo que es posible advertir que existe cierto interés público, cuando la fotografía obra en documentos de servidores públicos vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales.
2. Por lo anterior, cuando las fotografías de los servidores públicos obran en documentos que dan cuenta del cumplimiento de funciones, requisitos legales o los acredita como servidores públicos, no puede ser clasificado como confidencial, pues en este caso, es superado por el interés público de conocer si en realidad, la persona que se ostenta en carácter de servidor público, se encuentra en ese encargo, si realiza las funciones o si cumple con los requisitos legales; sin que se considere como factor diferenciador para determinar la publicidad o clasificación el cargo o nivel jerárquico en el que se desempeñe el servidor público.
3. De acuerdo con el argumento planteado, la determinación de esta resolución deja sin efectos el criterio adoptado anteriormente por el Pleno de este Instituto, con número 03/2019, en el que solo se consideraban como públicas las fotografías de mandos medios y/o superiores.
4. Conforme a lo anterior, las fotografías de servidores públicos sin importar el nivel o rango guardan la naturaleza de públicas (con excepción del personal operativo en materia de seguridad) no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que en las versiones públicas que se ordenen, no podrá clasificarse esa información.
5. Respecto al punto de la solicitud en que se observa *“Informes o constancias de participación en cursos de capacitación, entrenamientos y certificaciones recientes en materia de gestión de riesgos, atención a emergencias y otros temas relevantes..”* (Sic), se advierte que dentro de las funciones de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, se encuentra la de promover y coordinar los programas de capacitación para contribuir a la profesionalización de las servidoras públicas/los servidores públicos de la Dirección General, por lo que será el área encargada de proporcionar la información, y en caso de que no cuente con ella, bastará que lo haga del conocimiento al Particular.
6. Ahora bien, en relación a la solicitud respecto a los siguientes puntos: “…*Situación Jurídica: Certificados de no inhabilitación emitidos por las autoridades competentes para cada uno de los servidores públicos que actualmente desempeñan los cargos de Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento pertenecientes a la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias. Resoluciones administrativas o judiciales, si las hubiere, que determinen la inhabilitación o sanción administrativa de cualquiera de los mencionados servidores públicos. Registros de cualquier proceso disciplinario o administrativo en curso o concluido que involucre a los servidores públicos mencionados...”* (Sic), en primera instancia resulta oportuno señalar el significado de resolución, que de acuerdo a la Real Academia Española es: **“*Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial.”***;
7. Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en el expediente, en relación con lo establecido en el párrafo anterior, se observa que dentro de las funciones de la Contraloría Interna de la Comisión del Agua del Estado de México, se encuentra la de iniciar, substanciar y resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios, resarcitorios entre otros, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; verificar la recepción, trámite y resolución de las quejas y denuncias que se interpongan en contra de las servidoras públicas/los servidores públicos adscritos a la Comisión; remitir a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría los expedientes en los que el interesado solicite la abstención de ser sancionado; acordar la suspensión temporal de las servidoras públicas/los servidores públicos durante la substanciación del procedimiento administrativo conforme a la ley en la materia, así como dar aviso a la autoridad correspondiente; así como notificar al área jurídica de la Comisión de los hechos que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de un delito; entre otras, razón por la cual es procedente ordenar al Sujeto Obligado que, previa búsqueda exhaustiva y razonable, haga entrega en versión pública de lo solicitado.
8. Por otro lado, recordemos que el Recurrente también solicitó información referente a *resoluciones administrativas o judiciales, si las hubiere, que determinen la inhabilitación o sanción administrativa de cualquiera de los mencionados servidores públicos. Registros de cualquier proceso disciplinario o administrativo en curso o concluido que involucre a los servidores públicos mencionados,*  por lo que conviene señalar que dentro de las áreas que pudieran generar, poseer o administrar la información se advierte el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, cuyas atribuciones se encuentran contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría que establecen:

*“Artículo 43. Corresponde a los órganos internos de control de las dependencias y organismos auxiliares las atribuciones siguientes:*

*…*

*VI. Revisar las denuncias por presuntas infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidas por personas servidoras públicas de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo a la que se encuentren adscritos, y de particulares vinculados con faltas administrativas graves, en términos de la Ley de Responsabilidades; investigar y calificar las calificaciones que se definan en las faltas administrativas que detecte, así como llevar a cabo las acciones que procedan;*

*…*

*VIII. Revisar y verificar la información para substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, así como, emitir la resolución que en derecho proceda y, en su caso, proponer y verificar el cumplimiento de las sanciones respectivas, cuando se trate de faltas administrativas no graves, así como remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, los autos originales del expediente integrado con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a faltas administrativas graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de Responsabilidades, para su resolución;*

*IX. Planear y Programar la realización de diligencias en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de sus facultades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades;*

*X. Proponer la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas, en términos de la Ley de Responsabilidades;*

*XI. Instruir, tramitar y, en su caso, emitir la resolución de los recursos previstos por la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones aplicables en la materia;*

*XII. Revisar y verificar la información para substanciar y resolver incidentes que no tengan señalada una tramitación especial;*

*XIII. Coordinar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan, ante las diversas instancias jurisdiccionales, así como emitir las constancias y copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de Control;*

*…”*

1. Como se advierte de los preceptos legales señalados, el área que de acuerdo a sus facultades puede generar, poseer o administrar la información solicitada es el Órgano de Control Interno, por lo que la solicitud se debió turnar a dicha área.

* **De las Faltas Administrativas Graves y no Graves**

1. De lo anterior, se debe de establecer que un servidor público incurre en una falta administrativa no grave de acuerdo con lo regulado por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

***Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes****:*

*I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos, a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere esta Ley.*

1. *Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente Ley.*

*IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta Ley.*

*V. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables.*

*VI. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.*

*VII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso que el contratista sea persona jurídica colectiva, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que jurídicas colectivas.*

*VIII. Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas, presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados.*

*IX. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y responsabilidad o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.*

*X. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos con los que tenga relación con motivo de éste.*

*XI. Observar un trato respetuoso con sus subalternos.*

*XII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de esta Ley.*

*XIII.Cumplir con la entrega de índole administrativo del despacho y de toda aquella documentación inherente a su cargo, en los términos que establezcan las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen.*

*XIV. Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos.*

*XV. Abstenerse de solicitar requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la legislación aplicable, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económicas o negocios.*

*XVI. Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.*

*XVII. Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información personal recomendada por las instancias competentes.*

*XVIII. Cumplir oportunamente con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o cualquier de las Salas Auxiliares del mismo, así como pagar el monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, y*

*XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas aplicables.*

*Artículo 51. También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público. Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente por parte del Órgano Superior de Fiscalización o de la autoridad resolutora. En caso de no realizar el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, éstos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 79 de esta Ley cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.*

1. Ahora bien, en cuanto a las faltas graves la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, regula que incurra en una falta grave el servidor público que cometa u omita lo siguiente.

***Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:***

1. *El cohecho.*

*II. El peculado.*

*III. El desvío de recursos públicos.*

*IV. La utilización indebida de información.*

*V. El abuso de funciones.*

*VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.*

*VII. El actuar bajo conflicto de interés.*

*VIII. La contratación indebida.*

*IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.*

*X. El tráfico de influencias.*

*XI. El encubrimiento.*

*XII. El desacato.*

*XIII.La obstrucción de la Justicia.*

1. En esa línea, una vez que fue precisado lo anterior respecto de las faltas graves y no graves, se debe de indicar que las autoridades que tienen a cargo funciones dentro de la Contraloría Interna, tienen la obligación como servidores públicos de manejar la reserva y la secrecía de las quejas y denuncias o que se encuentren en su poder, por lo que, dichas autoridades no pueden publicar o dar información de los procedimientos que no han causado ejecución de sentencia.
2. Con lo anterior queda reafirmado que **EL SUJETO OBLIGADO** a través de su Contraloría Interna, es competente para conocer la información de mérito, en este sentido, se procede al análisis **de los supuestos de los procedimientos administrativos en los que procede la entrega de la información.**
3. Lo anterior, toda vez que existen excepciones para que se entregue la información solicitada con los procedimientos de investigación relacionados con actas administrativas, denuncias o actuaciones de oficio, como a continuación se precisa en el estudio.

* **Procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite.**

1. En principio es de señalar que el realizar un pronunciamiento sobre la existencia de un procedimiento de posibles responsabilidades en trámite, podría afectar al posible responsable, **ya que se daría a conocer la existencia de una investigación en su contra, lo cual, generaría una percepción negativa de estos, sin que se hubiere probado su responsabilidad o culpabilidad, lo cual dañaría, su honor y su derecho a la presunción de inocencia e inclusive su actividad profesional.**
2. En otras palabras, dar a conocer la existencia de un procedimiento de posibles responsabilidades en trámite, vulneraría la protección de su privacidad, honor y presunción de inocencia, ya que podría generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que se tenga una determinación firme, donde haya quedada acreditada su responsabilidad.
3. Respecto del **derecho a la privacidad**, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

*“****DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS****. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.”*

1. Como se observa, de la garantía de seguridad jurídica de un individuo a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Es decir, en el artículo 16, primer párrafo constitucional, se da el reconocimiento de un derecho a la privacidad de las personas que implica no ser sujeto de injerencias arbitrarias, intromisiones o molestias en el ámbito reservado de su vida o intimidad, ni de ataques a su honra o a su reputación, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
3. Por lo que hace al derecho al honor, la jurisprudencia número 1a./J. 118/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 3, de febrero de 2014, página 470, de la Décima Época, materia constitucional, señala:

***“DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.*** *A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible definir al honor como el* ***concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social****. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros.”*

1. Como se observa, el honor es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social.
2. En el ámbito de lo jurídico, es un Derecho humano que involucra la facultad de cada individuo de ser tratado de forma decorosa. Este derecho tiene dos elementos, el subjetivo, que se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad, y en un sentimiento objetivo, que es la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. **En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece.**
3. Adicionalmente, en relación a este derecho [al honor], el máximo tribunal también ha señalado que aunque no esté expresamente contenido en la Carta Magna, ésta obliga su tutela en términos de lo previsto en el artículo 1° Constitucional, como se muestra en la tesis aislada número I.5o.C.4 K (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Libro XXI, de junio de 2013, página 1258, de la Décima Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:

*“****DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. CONSTITUYEN DERECHOS HUMANOS QUE SE PROTEGEN A TRAVÉS DEL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL.*** *Si conforme a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos. Ahora, del contenido expreso del artículo 1o. constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.”(Sic)*

1. Tocante a la **presunción de inocencia,** es de mencionar que toda persona imputada tiene, entre otros, el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, donde compruebe su culpabilidad. tal como lo prevé la fracción I del apartado B, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 5, página 497, de abril de 2014, Décima Época, materia constitucional, de rubro y texto siguiente:

*“****PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL****. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.”*

1. De la jurisprudencia transcrita deviene que la presunción de inocencia se traduce en el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena, siendo importante mencionar que dicho Derecho se encuentra regulado, de la misma manera, en Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. En el mismo orden de ideas, la tesis aislada número 2a. XXXV/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, de mayo de dos mil siete, página 1186, de la Novena Época, materia constitucional y penal, establece:

***“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.*** *El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.”*

1. Como se observa, el Alto Tribunal sostiene que el principio de presunción de inocencia va más allá del ámbito estrictamente procesal, en aras de proteger la esfera jurídica de la persona que se ve en peligro ante actuaciones arbitrarias por parte del poder público. Así, dicho principio guarda también una faceta “extraprocesal” que se materializa a través de un trato de inocente para el inculpado mientras no se demuestre su culpabilidad.
2. Conforme a lo expuesto, **el dar a conocer los procedimientos se encuentre en trámite de probable responsabilidad, respecto a los servidores públicos referidos en la solicitud de información, generaría un juicio a priori o un juicio negativo en contra de los mismos por parte de la sociedad, sin que se hayan reunido los elementos para establecer si es o no responsable, vulnerando así la protección de su intimidad, su honor, la buena imagen y su derecho a la presunción de inocencia.**
3. Bajo lo previo, se considera que procede  **la clasificación del pronunciamiento sobre la existencia de algún procedimiento en trámite de responsabilidad por faltas graves o no graves que se hubiera iniciado en contra de la persona referida en la solicitud de información de ser el caso que hubiera o sea servidor público, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,** que es del tenor literal siguiente:

*“****Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;”*

1. No obstante, de lo anterior se estima necesario traer a colación el contenido del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

***“Artículo 142.******Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado*** *cuando:*

*…*

***IV****.* ***Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.”*

1. Del precepto citado se desprende que aquella información que se relacione con actos de corrupción, no puede actualizar alguno de los supuestos de clasificación como información reservada establecidos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. En el mismo tenor, el Lineamiento Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, dispone que no puede invocarse el carácter de reservado de la información **cuando esta se relacione con actos de corrupción,** en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
3. Mientras que el Código Penal Federal establece en su Título Decimo “Delitos por hechos de corrupción” a los siguientes:

* Ejercicio ilícito de servicio público (artículo 214)
* Abuso de autoridad (artículo 215)
* Coalición de servidores públicos (artículo 216)
* Uso ilícito de atribuciones y facultades (artículo 217)
* Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos (artículo 217 Ter)
* Concusión (artículo 218)
* Intimidación (artículo 219)
* Ejercicio abusivo de funciones (artículo 220)
* Tráfico de Influencia (artículo 221)
* Cohecho (artículo 222)
* Cohecho a servidores públicos extranjeros (artículo 222 bis)
* Peculado (artículo 223)
* Enriquecimiento Ilícito (artículo 224)

1. Siendo dicha información de gran trascendencia, ya que al estar involucrados servidores públicos existe una afectación directa al interés público en torno a las atribuciones de los entes públicos, como lo es, de manera enunciativa, más no limitativa, la administración de su patrimonio, la erogación de recursos públicos o la recaudación de contribuciones, derechos, impuestos, etcétera, lo cual afecta no sólo al ente público sino a toda la sociedad en general.
2. En función de lo expuesto, y considerando las conductas que pudieran ser investigadas, es que el derecho de acceso a la información cobra una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través del ejercicio de éste se puede conocer información relacionada con hechos de corrupción, que además por la importancia que ésta tiene para el erario municipal, resulta de mayor interés el impacto que dichas conductas pudieron tener en su detrimento, encuadrando en los artículos 3, fracción XXII y 9, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, este Instituto establece como:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XXII. Información de interés público:*** *Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados*

*…*

***Artículo 9.*** *El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:*

*…*

***VII. Máxima Publicidad:*** *Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática…”*

1. De lo anterior, se colige que, el interés público está relacionado con el principio de máxima publicidad y las excepciones a la clasificación de la información; pues existe un interés general de la sociedad de conocer sobre los posibles actos de corrupción al no ser afectaciones que se dan en lo individual, sino que existe un detrimento en un grupo o en la población en general.
2. Por tal motivo, se considera para el caso de que existiera algún expediente relacionado con faltas administrativas en trámite, y que estén relacionados con alguna excepción de las establecidas en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, tales como actos de corrupción, se **deberá entregar el soporte documental correspondiente que dé cuenta del nombre y cargo de los servidores públicos cuyos procedimientos se encuentren concluidos y que hayan causado estado, por faltas administrativas graves condenatorias, así como de aquellos que se encuentren en trámite relacionados con actos de corrupción, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia Local, conforme al considerando quinto del presente fallo.**
3. Siendo importante mencionar que si bien entregar el nombre y cargo respecto a la existencia de un procedimiento de sanción administrativa, podría generar una percepción negativa de éste, ocasionando un perjuicio en su **honor, intimidad, buena imagen y nombre, así como a su vida privada,** también lo es, que **tratándose de asuntos relacionados con actos de corrupción, se trataría de una falta grave, por lo que tales prerrogativas quedan supeditadas al interés mayor de conocer tales eventualidades y por lo tanto no procede su clasificación en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.**
4. Aunado a lo anterior, cierto es que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta en tanto se demuestre lo contrario, sin embargo, en el caso de actos de corrupción nos encontramos ante un caso de trascendencia social e interés público, sobreviniendo una colisión entre derechos fundamentales, esto es, por una parte, se busca mantener la secrecía de los nombres de los servidores públicos denunciados, es decir, el nombre de las personas que enfrentan acusaciones sobre esos actos y; por otro, se pretende dar acceso a información que es de interés de los ciudadanos porque versa sobre una afectación económica al erario público.
5. En tal contexto, si los hechos investigados son en razón de conductas presuntamente ilegales, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de funciones, el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, de personas que en el ejercicio de sus funciones públicas, causaron un detrimento y se presume obtuvieron un beneficio personal, luego entonces **existe una preferencia social mayor que trasciende para dar a conocer, precisamente los nombres de los servidores o ex servidores que enfrentan acusaciones sobre este caso, debiendo por tanto darse a conocer dicho dato, en caso de actualizarse la excepción a la excepción, prevista en el artículo 142 dela Ley de la materia, por lo que en el presente caso no se vulneran los derechos de la persona, aun cuando es plenamente identificada.**
6. A efecto de sustentar lo anterior, es aplicable por analogía la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en la Resolución del Recurso de Revisión de Acceso con número de folio RRA 12225/22, que en su parte conducente, señala lo siguiente:

*“****ANÁLISIS DE INTERÉS PÚBLICO***

*[...]*

*Señalado lo anterior, resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados que convergen en la controversia que se dirime, para lo cual, resulta pertinente traer al estudio lo señalado en el artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para estos efectos, se entenderá por:*

*∙* ***Idoneidad:*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;*

*∙* ***Necesidad:*** *La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y*

*∙* ***Proporcionalidad:*** *El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

*En el mismo sentido, resulta aplicable la tesis I.4o.A.70 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, página 2346, de agosto de 2006, Novena Época, materia común:*

***“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR. Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad****, la cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivo pretendido;* ***b) necesidad****, consistente en que no exista otro medio menos limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y* ***c) el mandato de proporcionalidad entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado****. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio.”*

*Como se aprecia de la tesis citada, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, el problema se debe resolver atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, antes descritos.*

*En ese orden de ideas, resulta procedente analizar cada uno de los elementos referidos, partiendo de que, en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.*

1. ***IDONEIDAD.*** *La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de una finalidad constitucionalmente válida o apta para conseguir el fin pretendido.*

*El artículo 6 constitucional, apartado A, fracción I estipula que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.*

*Conforme a dicho precepto, el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", el cual contiene una doble dimensión: individual y social.*

*∙ En aspecto individual, maximiza el campo de la autonomía personal, posibilita el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto diversidad de datos, voces y opiniones.*

*∙ Mientras que, en el social, evidencia el valor instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas.*

*Así, el derecho de acceso a la información resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*Al respecto, el interés de conocer los nombres de los servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre estos casos evidencia el ejercicio del derecho de acceso a la información, en virtud de que se trata de un caso relacionado con presuntos hechos de corrupción cometidos con recursos públicos.*

*En ese orden,* ***si los hechos investigados son en razón de conductas presuntamente ilegales, el ejercicio ilícito de servicio público, el uso ilícito de funciones, el cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, de personas que en el ejercicio de sus funciones públicas, causaron un detrimento en el erario*** *federal a través de los recursos públicos destinados al Servicio de Administración Tributaria que dejaron de ingresar con las que* ***se presume obtuvieron un beneficio personal****, luego entonces* ***existe una preferencia social mayor que trasciende para dar a conocer, precisamente los nombres de los servidores que enfrentan acusaciones sobre este caso.***

*Por lo tanto, en el caso, prevalece el derecho de acceso a la información sobre la protección de su intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia, toda vez que es el medio idóneo para la rendición de cuentas sobre la efectiva investigación de hechos relacionados con el desempeño de las funciones de los servidores públicos y ex servidores públicos de en relación con los hechos investigados, lo que deja en segundo lugar la necesidad individual de proteger sus nombres.*

1. ***NECESIDAD****. La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público.*

*A través del ejercicio del derecho a la información se cubre la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades que la representan, en ese sentido, constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las conductas denunciadas por parte del Servicio de Administración Tributaria que forman parte de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República.*

*Esto es,* ***la necesidad de la colectividad de estar en posibilidad de evaluar el desempeño de las autoridades que la representa, constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con los nombres de los servidores públicos y ex servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre los casos denunciados, puesto que probablemente incurrieron en diversos delitos de corrupción****, tales como cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, catalogados como actos de corrupción en el Código Penal Federal, así como en la Convención Interamericana contra la Corrupción.*

*En este sentido, nuevamente el derecho de acceso a la información prevalece sobre la protección de la información solicitada, puesto que el sacrificio que implica la revelación de los nombres de los servidores públicos y ex servidores es el medio menos oneroso para que la sociedad conozca quiénes de los servidores públicos o ex servidores públicos, que supuestamente velan así por el manejo y la debida aplicación de fondos y recursos federales, probablemente están involucrados en el desvío de dichos recursos, lo cual, de ser el caso, indudablemente repercute en la economía del país, así como el nombre de cualquier otra persona involucrada en los hechos.*

*Es decir, si se negara el derecho de acceso a los datos peticionados, -en el caso concreto- se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades de investigación, en este caso, respecto de los delitos catalogados como actos de corrupción en el Código Penal Federal.*

1. ***PROPORCIONALIDAD****. El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.*

*Conforme a lo expuesto,* ***si bien se causa un perjuicio a la intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia, de los servidores y ex servidores públicos que enfrentan acusaciones sobre diversos casos****, lo cierto es que,* ***divulgar sus nombres representa un beneficio mayor para la sociedad puesto que rinde cuentas sobre quiénes están probablemente implicados en conductas relacionadas con hechos de corrupción****.*

*Sumado a lo anterior, debemos recordar que uno de los señalamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo cual ha sido ratificado por México, es que la corrupción atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia.*

*De manera que, si la Fiscalía General de la República aperturó diversas carpetas de investigación en contra de las personas que posiblemente cometieron actos de corrupción, el hecho de que dé a conocer sus nombres, independientemente de que se encuentre en la fase de investigación, significaría rendir cuentas del compromiso del Estado Mexicano en el combate a la corrupción ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y frente a la sociedad nacional e internacional.*

*En este sentido, se robustece la necesidad de que impere el derecho de acceso a la información sobre los principios antes referidos, toda vez que es proporcional la satisfacción de la sociedad de conocer la información de interés, toda vez que, de ser el caso, la declaración de inocencia, en su momento, los liberará de los señalamientos a que haya lugar.*

*Por tanto, es posible concluir que, en la ponderación realizada, se cumple con los tres elementos para dotarle de preminencia al derecho de acceso a la información, a efecto de poder entregar la información relativa a los servidores o ex servidores denunciados pues con el análisis de interés público* ***no es posible clasificarla en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia.”***

* **De los procedimientos sobre faltas administrativas concluidas.**

1. Ahora bien, para el caso de que la información se encuentre relacionada con procedimientos por faltas administrativas concluidas, como se mencionó en líneas anteriores, solo pueden ser dadas a conocer las **responsabilidades administrativas por faltas graves condenatorias**, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios que establece que **las sanciones no graves no serán públicas**, **así como las graves absolutorias**, en virtud de que dichas faltas, **no tienen una trascendencia social,** pues no existe un daño externo, sino que únicamente le atañe al servidor público en cuestión.
2. En este entendido, es evidente que, en caso de existir procedimientos concluidos instaurados en contra de los servidores públicos de las dependencias del Sujeto Obligado, **por faltas graves absolutorias** y **no graves condenatorias o absolutorias**, dicha información tiene el carácter de confidencial, y por tanto debe clasificarse el nombre y cargo de los servidores públicos en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. No obstante, si los procedimientos concluidos se relacionan con faltas administrativas **graves condenatorias** y estas han quedado firmes, es decir, que el procedimiento ya no acepta recurso o medio de defensa alguno, es procedente entregar el soporte documental a la parte **RECURRENTE** que dé cuenta del nombre y cargo de los servidores públicos cuyos procedimientos se encuentren concluidos y que hayan causado estado, por faltas administrativas graves condenatorias, así como de aquellos que se encuentren en trámite relacionados con actos de corrupción, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia Local, del primero de enero al veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en versión pública para el caso de que el mismo contenga datos personales susceptibles de protegerse, reiterando que en dicho supuesto, no se vulnera el derecho del servidor público referido, aun cuando este sea plenamente identificable.
4. Lo anterior, ya que como se precisó en párrafos anteriores, proporcionar la información de referencia, garantizaría la rendición de cuentas por parte del **SUJETO OBLIGADO**, relativo a su actuación, teniendo como consecuencia que los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades, al poder conocer información derivada de los procedimientos administrativos que hayan concluido con resolución en donde se determine que un servidor público tuvo responsabilidades graves, relacionadas al ejercicio de las funciones. Además que, con dicha información, se estaría revelando que el desempeño del servidor público, en caso de haber sido sancionado, no fue conforme a derecho.
5. De lo plasmado en los dos párrafos anteriores, se establece que, la información requerida forma parte de las Obligaciones de Transparencia del **Sujeto Obligado**, lo que nos permite traer a colación lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en el cual se aprecia lo siguiente:

***Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.***

1. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 3, fracción XI, 12 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales son del tenor literal siguiente:

***Artículo 3.-*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI.******Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien,* ***cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona,*** *en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera* ***y que obre en sus archivos*** *y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.*

1. En ese contexto se tiene que, el procedimiento de acceso a la información pública, descrito en el Título Séptimo de la Ley de Transparencia describe los pasos que debe seguir la autoridad para atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de su derecho, entre los cuales se encuentra el deber de las Unidades de Transparencia **de turnar a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,** competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, según se asienta en el artículo 162 de la ley citada.

***“Artículo 162.*** *Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”*

1. Por tales circunstancias, se considera que el Sujeto Obligado, para atender la solicitud de información, deberá realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las áreas que integran la Comisión del Agua del Estado de México.
2. Ahora bien, para el caso de que alguna de la información solicitada no exista, el **Sujeto Obligado** deberá de hacerlo del conocimiento de LA PARTE RECURRENTE, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio.
3. Finalmente no pasa desapercibido para este Instituto que los documentos que den cuenta de los solicitados pudieran contener datos o información clasificada; por lo que, en el supuesto, deberá elaborar la versión pública respectiva; conforme al artículo 3, fracción XLV, relacionado con el 137, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuando un documento contenga información pública y confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender al requerimiento informativo, deberá elaborar una versión pública en la que testen las partes o secciones clasificadas indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación.
4. Para tal situación, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos, fundando y motivando la clasificación.

1. En virtud de lo anterior, se determina que la información emitida por el **Sujeto Obligado** en su respuesta, no cumple con lo establecido por los artículos 4, 12, 24 último párrafo y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**QUINTO. De la versión pública.**

**Nociones generales.**

1. Debe destacarse que, debido a la naturaleza de la información solicitada**,** eventualmente pudiera obrar datos personales susceptibles de protegerse, así como información susceptible de clasificarse como reservada, el **Sujeto Obligado** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados.
2. Resultando dable primeramente señalar que por lo que hace a nombre de personas o *personalidades*, sólo es dable dar a conocer aquellas que al momento de que eventualmente haya entregado su aportación tuvieran el carácter de servidor público, caso contrario, **los nombres de los particulares**, son datos personales que no pueden ser remitidos en respuesta, de ser el caso en el soporte documental donde consten u obren deberán ser clasificados como confidenciales.
3. No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los **Sujetos Obligados** serán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Requisitos previos. | Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.  Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).  Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.  El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados. |
| b) Supuestos de clasificación. | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El Sujeto Obligado debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación. | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que el acto reúna con los requisitos elementales, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. El área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación. | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los Sujetos Obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta clasificación total o parcial, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, para cada caso además de fundar y motivar, se debe identificar con claridad qué datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial. | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Derivado de lo establecido en párrafos anteriores, si el **SUJETO OBLIGADO** incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales o testando datos considerados como públicos incumple con lo que estipulan las disposiciones legales establecidas, asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.
2. En ese sentido, se establece que para el periodo de búsqueda de la información solicitada, referidos en la solicitud de información es del diecinueve de agosto de dos mil veintitrés al diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro.
3. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **05168/INFOEM/IP/RR/2024** en términos de los **Considerando** **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **REVOCA** la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO** a la solicitud de información número **00401/CAEM/IP/2024** y se **ORDENA** entregar, previa búsqueda exhaustiva, vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense la siguiente información del **Director General, Subdirectores y Jefes de Departamento de la Dirección de Operación y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua,** en funciones al 19 de agosto de 2024, en versión pública:

1. Documento donde conste o se advierta la información académica y profesional;
2. Documento donde conste o se advierta la experiencia profesional o laboral; especialmente su trayectoria en la gestión de emergencias meteorológicas y atención a contingencias
3. Soporte documental que contenga los informes, constancias de participación en cursos de capacitación, entrenamiento y certificaciones recientes en materia de gestión de riesgos, atención a emergencias y otros temas relevantes;
4. Constancias de no inhabilitación;
5. Documentos donde conste o se advierta los informes de desempeño y evaluaciones o evaluaciones internas y externas de la actuación de Dirección General de Operaciones y Atención de Emergencias en respuesta a los recientes eventos meteorológicos, así como auditorías, análisis de desempeño de la eficacia de las medidas adoptadas por los servidores públicos respecto a la capacidad de respuesta de los recientes eventos meteorológicos.
6. Documento donde consten las sanciones, relacionadas con los servidores públicos referidos en la solicitud de información, cuando se trate de procedimientos administrativos que se encuentren concluidos y se haya determinado una responsabilidad grave, o bien, se encuentren en trámite en algún procedimiento que se relacione con actos de corrupción o posibles violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso, de que no se tengan procedimientos administrativos; se haya iniciado algún procedimiento administrativo que se encuentre en trámite (con excepción de los ya señalados anteriormente), o bien, se encuentre concluido y se haya determinado alguna responsabilidad no grave o la absolución, deberá proporcionar el Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, confirme la clasificación del pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre la existencia de procedimientos administrativos, en términos de los artículos 49, fracción II, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para efectos de lo anterior se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII, y 132, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se ponga a disposición del RECURRENTE.

Para el caso de que no cuente con la información por procedimientos por falta grave concluidos, por no haberse generado, deberá de hacerlo del conocimiento del RECURRENTE en términos del artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso de que no se cuente con alguna de la información solicitada en los numerales c) y e), bastará que el **SUJETO OBLIGADO** lo haga del conocimiento, en términos del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En relación al inciso b), para el caso de que no se cuente con la trayectoria en la gestión de emergencias meteorológicas y atención a contingencias, por no haberse generado, deberá de hacerlo del conocimiento del RECURRENTE en términos del artículo 19 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO,** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese al **RECURRENTE** la presente resolución vía SAIMEX.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA EMITIENDO VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA EMITIENDO VOTO PARTICULAR; EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.